

Alcaldes, capitanes de navío y huérfanas.

El comercio de cueros y la beneficencia pública en Buenos Aires a comienzos del siglo XVIII

Lic. Carlos María Birocco
Universidad de Morón - UNLu

Ganado cimarrón, comercio de cueros y beneficencia pública: hacia un planteo del problema

La vecindad española de Buenos Aires careció de las riquezas minerales y la mano de obra indígena excedentaria con que se sustentaron las élites de las regiones centrales del Imperio Hispánico. Pero en las extensas praderas que circundaban aquella ciudad se generó a comienzos del siglo XVII un recurso que consiguió paliar aquella “pobreza” originaria: el ganado vacuno cimarrón. Este tuvo su origen en los animales que huyeron de los rodeos de los conquistadores y sus descendientes y, por lo tanto, nunca fue considerado un *bien mostrenco*, sino perteneciente a los vecinos que tenían estancia poblada cuando aquellos comenzaron a alzarse. Para evitar su explotación indiscriminada, el cabildo porteño procedió a matricular a los propietarios y reconocerles su *acción* a ese ganado.

Estos *vecinos accioneros* fueron representados a partir de 1609 por el cabildo, que corrió con la legitimación de sus títulos, la autorización de las expediciones de caza o *vaquerías* y la venta de los cueros a las embarcaciones que se presentaban en el puerto. Los cimarrones se convirtieron, en suma, en un bien de administración comunal pero de propiedad individual. Desde finales de aquella centuria, sin embargo, los gobernadores de Buenos Aires consiguieron desplazar a la corporación municipal en la comercialización de los cueros. Su grado de injerencia se hizo cada vez mayor y en tiempos de Agustín de Robles, Alonso de Valdés Inclán y Juan de Velasco y Tejada, todo tipo de contratación relacionada con la explotación del ganado cimarrón quedó supeditada a su aprobación.

Los accioneros, aunque jamás fueron despojados de sus derechos de propiedad sobre el ganado, fueron perdiendo gradualmente la posibilidad de usufructuarlo. A pesar de las estrategias parentales tramadas por las familias accioneras para mantenerse como un sector relativamente cerrado, a las que nos referiremos más adelante, la titularidad sobre las acciones era susceptible de ser transferida por medio de herencias, ventas o donaciones y terminó recayendo con frecuencia en congregaciones religiosas o individuos no capacitados para emprender la explotación por sí mismos. De ello resultó la profesionalización de las figuras del *vaqueador* o el *recogedor*, distintas de las del accionero, a quienes las autoridades otorgaban licencia para hacer corambre.

A partir de la última década del siglo XVII, las vaquerías fueron confiadas a individuos del entorno del gobernador de turno. No obstante, los dueños de las acciones solían ser compensados con el llamado *tercio de los accioneros*, es decir, con la tercera parte de las utilidades del tráfico de cueros, abonada en plata o géneros. Pero esta costumbre, refrendada por dos Reales Cédulas de Carlos II en 1695 y 1696, fue alterada por los gobernadores Alonso de Valdés Inclán y Manuel de Velasco y Tejada, que redujeron la cuota asignada a los accioneros e incluyeron en el *reparto de cueros* a las viudas de los oficiales y soldados del Presidio de Buenos Aires, perjudicadas por el crónico retraso en

la llegada del *Real Situado* desde las Cajas de Potosí.

Esto puede apreciarse en la lista de los beneficiados por Valdés Inclán en abril de 1707: aunque pobre en información, se vislumbra claramente que los accioneros habían sido parcialmente desplazados del derecho del *tercio* con el objeto de cumplir con un fin benéfico, el de sustentar a las viudas de los militares de la guarnición y otras mujeres desamparadas.¹ Ese año, los asentistas de la Compañía de Guinea habían comprado al gobernador 29.151 cueros para llenar las bodegas de sus barcos negreros. Las pieles fueron pagadas en plata, pero ésta debió ser invertida en obras de infraestructura como la reparación de las fortificaciones de Buenos Aires, las obras de refacción de la casa del cabildo, la construcción de una cárcel y el mantenimiento del Hospital Real de San Martín. El gobernador destinó menos de la quinta parte de lo que pagaron los asentistas franceses a implementar su política de beneficencia y resarcir a los vecinos accioneros. De los 5900 pesos en plata que distribuyó en esa ocasión, 3250 (esto es, el 55,1%) se distribuyó entre estos últimos. El dinero restante lo destinó a asistir a las viudas de los militares del Presidio (950 pesos, el 16,1%) y otras mujeres empobrecidas pero con reconocida calidad de vecinas españolas, manifestada en el tratamiento de *doña* (1700 pesos, el 28,8%).

La mayor parte de las asignaciones de Valdés Inclán recayó en mujeres: éstas fueron el 81% de los beneficiados por el *reparto*. En algunas de ellas coincidieron los atributos de accionera y viuda de militar (11,5%), mientras que otras eran sólo viudas de militares (43,7%) o accioneras (9,2%). Debe recordarse que el pago a los militares del Presidio distaba de ser regular: a algunas de ellas se les adeudaban los sueldos de varios años de sus esposos fallecidos debido a los retrasos en la llegada de las anualidades desde Potosí. Puede verse en esta política de asistencia un antecedente del Montepío Militar de la época virreinal.

No obstante, hubo un 35,6% de mujeres que no podían alegar ninguna de las dos cualidades referidas, y sin embargo recibieron pequeñas cantidades en plata, casi nunca mayores de 25 pesos. Las escasas anotaciones vertidas junto a sus nombres muestran con bastante claridad a quienes se consideraba con méritos suficientes para ser asistidas: en rasgos generales, las que se hallaban desvalidas o privadas de contención masculina, o bien mantenían parientes inválidos o huérfanos. A doña María Torres Briseño, por ejemplo, se la socorrió porque su marido se había ausentado hacía 26 años y la había dejado desamparada. A doña María Astudillo y doña María Enríquez se le entregaron, respectivamente, 100 y 25 pesos, debido a su condición de *beatas*, y a la última además por tener a su cargo a su madre ciega. A doña Ana Pereira se le dio una pequeña suma por tener consigo a cuatro hermanas huérfanas, a la viuda doña Isabel de Sosa y Monsalve por ser madre de cinco hijos, tres de los cuales eran dementes, y a doña Isabel de Melo porque su marido estaba impedido.

¿Clientelismo o beneficencia? El cabildo y las *limosnas de cueros* de 1723

Al concluir la Guerra de Sucesión, Felipe V premió la lealtad del cabildo de Buenos Aires durante la contienda restituyéndole los derechos sobre el ganado cimarrón. Gracias a dos Real Cédulas de 1714 y 1716, la comercialización de los cueros volvió a manos de la corporación municipal y la élite porteña volvió a apoderarse, valiéndose de su plataforma institucional, de la explotación de las riquezas pecuarias. Pero los accioneros, que en su mayor parte ya no formaban parte de esa élite, siguieron incorporados a un sistema de *repartos* que también incluía a los pobres vergonzantes, las viudas y los huérfanos de la ciudad. Como ordinariamente las utilidades del tráfico de cueros eran insuficientes para implementar una política de beneficencia pública y cumplir a la vez

¹ El listado de 1707 se encuentra en AGN IX-11-1-3, *Juicio de Residencia a Juan Valdés Inclán*.

con el *tercio*, los alcaldes ordinarios del cabildo se vieron obligados a decidir –a menudo arbitrariamente– a qué accioneros y a qué pobres se favorecía en cada *reparto*.

El cabildo, que volvió a controlar las ventas de corambre a los navíos de registro y los barcos negreros, hizo depender sus políticas asistenciales de estos ingresos, como lo habían hecho anteriormente los gobernadores. Los accioneros, como bien dijimos, no quedaron excluidos: su matrícula fue depurada, expurgando de la misma a todos aquellos que presentaran títulos imperfectos, pero se los agregó a un conjunto mucho más amplio de beneficiarios. Analizaremos quienes componían dicho conjunto a través del análisis de un caso: el *reparto de cueros* efectuado por el cabildo en 1723, al que se postularon varios cientos de vecinos que aspiraban recibir limosna o se consideraban con derechos al *tercio*.²

Aquel año varias embarcaciones se habían presentado en el puerto solicitando corambre. Los capitanes Salvador García Pose y Joaquín de Tribiños, propietarios de tres navíos de registro, pidieron 20.000 pieles para embarcar a Sevilla, mientras que la administración local de la South Sea Company demandó 40.000 pieles para llenar las bodegas de cuatro barcos negreros. El cabildo se aprestó a otorgar licencias para que se realizaran varias vaquerías. Determinó que los cueros de los registreros, lo mismo que 25.000 de los que había requerido el Asiento, serían hechos en la Banda Oriental a un precio de 11 reales por pieza, mientras que los 15.000 restantes se harían en esta banda, a 13 reales por pieza. Lógicamente, los ingleses presionaron al ayuntamiento para que autorizara que las dos vaquerías se realizaran en las campañas de San Gabriel, en territorio oriental, a fin de disminuir los costos.³

Conminado por los asentistas, el cabildo escrutó si quedaban ganados en áreas no tan lejanas a la ciudad –se organizó una expedición hasta el Tuyú a tal efecto– pero la escasez de animales en las praderas pampeanas ya se presentaba como irreversible. En la sesión del 4 de septiembre de 1723, los cabildantes aceptaron que se habían hallado “*dichas campañas muy destruidas de los ganados vacunos y que los pocos que han quedado se hallan retirados en las Sierras en distancia de más de cien leguas cuyos caminos son muy penosos... y sobre todo lo que más imposibilita estas faenas es el riesgo de los indios infieles para cuyo resguardo será precisa escolta de cien hombres*”.⁴ Un acuerdo posterior reveló que las últimas toradas cimarronas se encontraban a unas 150 leguas del puerto, donde la llanura estaba “*infestada de indios serranos, pegüenches y aucaes que bajan de la cordillera de Chile*”⁵

La disconformidad de los británicos con los precios propuestos por el ayuntamiento condujo a una nueva negociación y pospuso la realización de la vaquería que debía surtir a los barcos negreros. Pero los navíos de registro de García Pose y Tribiños fueron abastecidos a término. Esto arrojó una entrada de 30.000 pesos. No fue fácil distribuir libremente estos fondos, ya que debía cumplirse aunque sea parcialmente con el *tercio* de los accioneros. Surgió el problema de satisfacer a todos los que exhibieran títulos en regla, no sólo a los que se caratulaba como *principales*, y hubo que nombrar dos diputados para ordenar la matrícula. Sólo así se pudo atender las necesidades de los *pobres miserables*, cuyo derecho a ser asistidos fue considerado por primera vez tan legítimo como el de los accioneros. El acuerdo del 15 de julio de 1723 refiere que

² Las peticiones de 1723 han sido incluidas por error en IX-19-7-2, *Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1774-1809)*.

³ Actas del Extinto Cabildo de la ciudad de Buenos Aires [en adelante AECBA] Serie III, Tomo V, pag. 139 y 154.

⁴ AECBA Serie III, Tomo V, pag. 122.

⁵ AECBA Serie III, Tomo V, pag. 142.

*“...habiendo reconocido por los repartimientos pasados que sólo se atendían a las personas que se discurrían ser principales en las acciones a repartirles las porciones de cueros que se hacían, y que en esta forma no disfrutaban esta conveniencia los demás que tenían derecho a dichas acciones por ser pobres o por no tenerlos presentes de que se le seguía grave perjuicio a los que no se repartían, fueron de parecer que para obviar estos inconvenientes y que todos los accioneros, así troncos como ramas, gocen de este beneficio **se haga el repartimiento presente y los demás sucesivos en las acciones principales que se hallan matriculadas** y en las justificadas y en las que en adelante se justificasen para que el producto que a cada una tocara se reparta por igualdad entre todos los interesados de la acción repartida y para ellos se nombraron por diputados a dichos señores Don Sebastián Delgado y Don Miguel de Esparza con facultad de poder despachar libremente.*

*...Dijeron que teniendo presente la Real Cédula de S.M. que confirma los repartimientos hechos hasta aquí y estar en práctica que así a los troncos de las acciones como a sus ramas se les ha repartido como consta de dichos repartimientos es de sentir que **se separe lo que es acostumbrado para las pobres viudas y huérfanos**, y son de sentir hoy que en los repartimientos que en adelante hubiere se separe alguna cantidad para los reparos que se puedan ofrecer en orden a las salidas de Campañas para el resguardo de los ganados que con eso se mantendrán que es lo principal a que este Cabildo debe atender...”⁶*

Dos días más tarde se llegó a una decisión respecto de cómo debía realizarse la distribución:

*“...se han hecho en esta sala repetidas juntas y en ellas se ha propuesto y conferido el modo de practicar el referido repartimiento reconociéndose muchas e indisolubles confusiones por la multiplicidad de accioneros incapaces de averiguar sus troncos y ramas de que se originan gravísimos perjuicios, mayores que los que se pretendían excusar en la resolución tomada en el referido acuerdo. Mediante lo cual es de parecer que no obstan lo expresado **se guarde, observe y practique el modo antiguo de repartir los cueros entre los legítimos accioneros** hasta la cantidad que prorratados alcanzaren según la equidad distributiva, **segregándose trescientos pesos para repartir entre pobres miserables...**”⁷*

No sabemos en qué momento preciso se implementaron los *repartos*, pero en el transcurso de ese año tanto los accioneros como los pobres de ambos sexos y los huérfanos fueron convocados al despacho de los alcaldes ordinarios del cabildo.⁸ Uno de estos alcaldes, Antonio Gallegos, fue el encargado de recibir sus peticiones y el que en definitiva decidió a quien se beneficiaba y a quien se rechazaba. Se realizaron por lo menos dos *repartos de limosnas* o *repartos de cueros* (esos fueron los términos figurativos en que se expresaron la mayor parte de aspirantes) entre un número bastante reducido de personas: la mayor parte de los peticionantes quedaron descartados por motivos que muy pocas veces fueron aclarados. Contados vecinos (en su mayoría mujeres) recibieron un corto número de varas de tela o excepcionalmente algunos reales en plata. Que

⁶ AECBA Serie III, Tomo V, pags. 98-99.

⁷ AECBA Serie III, Tomo V, pags. 100-101.

⁸ Según declara una de las peticionantes, “*han sido llamados los accioneros, viudas y huérfanas de esta ciudad*”; IX-19-7-2, Archivo del Cabildo de Buenos Aires (1774-1809). [A partir de aquí, todas las citas, salvo referencia a contrario, corresponden a este legajo. La totalidad de los subrayados en las mismas son del autor de este artículo]

los legados o *limosnas* serían hechos en textiles es algo que quedó claro desde por lo menos la segunda convocatoria.⁹

Las peticiones que se conservan ascienden a 460 y constituyen sin lugar a dudas una fuente documental invaluable sobre las políticas municipales de asistencia anteriores a la creación del Virreinato. Se trata en todos los casos de breves rogativas, dictadas a un escribiente o escritas por los mismos solicitantes en hojas de 10 por 15 centímetros, casi todas ellas utilizando una sola carilla. Algunos supieron firmarlas, pero la mayoría no lo hizo: recordemos que se trataba de una población substancialmente analfabeta, sobre todo en el caso de las mujeres. No obstante, la inmensa mayoría de las solicitudes fueron redactadas en primera persona, lo que indica a las claras que no se aceptaba que fueran presentadas por parientes o gestores. Sólo en contadísimos casos –el de alguna huérfana menor de edad o alguna beata retirada en vida de oración– se permitió, a manera de excepción, que la petición fuera entregada por un tercero.

Parece haberse insistido en que los peticionantes identificaran las causas de su solicitud, pero sin facilitarles formularios ni indicaciones por escrito. En este sentido, las peticiones difieren de las que presentaban los pobres urbanos ante las asociaciones de socorro de Europa Occidental. Una de ellas, la *Congregazione di San Giovanni Battista* de la ciudad de Florencia, estudiada por Stuart Wolf, exigía a los solicitantes que rellenaran un impreso en que se les requería información sobre el nombre del peticionante, su relación con el jefe de la unidad familiar, edad, estado de salud, oficio, nombre del patrón y salario semanal. Además debían especificar la forma de asistencia que esperaban conseguir y refrendar su declaración con el comentario y la firma del cura párroco.¹⁰ Esto no ocurre con las rogativas de 1723, del que no tenemos evidencias que siguieran algún tipo de indicaciones o reglas escritas.

Buena parte de los solicitantes se consideraban a sí mismos *pobres vergonzantes*. Estos eran, al decir de Donzelot, los que se sentían avergonzados de pedir ayuda “a causa de su profesión o cuna” y debían ocultar su miseria para no perder su reputación o las de sus familias.¹¹ En Buenos Aires, la pobreza también podía contrastar con la *calidad* de una persona. Que alguien se considerara pobre no significaba que fuera necesariamente un vagabundo o un mendigo. Ninguno de los vecinos que solicitó ayuda del cabildo en 1723, ciertamente, lo era. Incluso el 68,6% de quienes acudieron por una limosna ostentaba el título de *don* o *doña*. Más allá de que la pobreza de algunos pudiera ser un mero fingimiento, pensamos que podía expresar perfectamente la insatisfacción de no vivir como lo exigía su *calidad* de vecinos españoles. O también el temor de degradarse y convertirse, a la larga, en otro tipo de pobres, los menesterosos.

Al leer los petitorios, lógicamente, no resulta fácil establecer cuánto había de realidad y cuánto de retórico en ellos. No obstante, no debe olvidarse que en 1723 Buenos Aires era una ciudad de reducidas dimensiones, con poco más de diez mil almas, donde era poco probable que la información pudiera ser falseada con éxito. No es improbable que algunos de esos “pobres”, descendientes de los *vecinos conquistadores* de la ciudad, se sintieran sinceramente deshonrados al tener que ocupar sus manos en el trabajo. Tampoco que al no tener un lugar donde vivir, temieran que el resto de la vecindad confundiera su peregrinaje por las casas de sus parientes con una suerte de vagabundeo. Pero asimismo es cierto que buscaban la manera más eficaz para persuadir a las autoridades capitulares sobre sus carencias, fingidas o reales, para que se los beneficiara en el *re-*

⁹ En esa ocasión, una de las solicitantes rogó que “*se sirva favorecerla con una limosna de los deshechos de algunos retazos de bayeta o lienzo con que en parte pueda honestar su desnudez*”.

¹⁰ Stuart WOLF *Los pobres en la Europa moderna* Crítica, Barcelona, 1989, pags. 221-222.

¹¹ Jacques DONZELOT *La policía de las familias* Pre-Textos, Valencia, 1979, pag. 63; Silvia ARROM “Desintegración familiar y pauperización...”, pags. 125-126.

parto. Por eso, nos parece importante determinar el repertorio de estrategias discursivas de que se valieron al peticionar ante el cabildo, intentando no arriesgar juicios sobre la sinceridad de sus declaraciones.

Lo primero que importa definir es la actitud preponderante de los peticionantes frente al ayuntamiento. El tenor discursivo de las solicitudes, sobre todo de los que se decían pobres, era de extremo respeto y reverencia a las autoridades corporativas, dando a entender su acatamiento a las consignas de docilidad y pasividad exigidas a los pobres del Antiguo Régimen. En algunas de las peticiones, el cabildo (y en su representación el alcalde ordinario) fue llamado *padre* de los pobres. Sin duda, esta visión de la corporación vecinal, que acaso ella misma alentaba, recogía la concepción de *paternitas* que se atribuía en la Antigüedad al Senado romano.¹² Así se dirigía, por ejemplo, doña Andrea Ortiz de Leguisamo, vecina accionera, al alcalde Gallegos:

*“...presupuesto el repartimiento que Vmd se sirve de hacernos limosna a las pobres necesitadas y hallándome en la mayor [pobreza], que es estar cargada de obligaciones de hijos para mantenerlos, pido esta limosna, **que como Padre atenderá a las pobres desvalidas**”.*

Doña Sabina Flores le dispensaba un tratamiento similar:

*“...respecto de hallarse pobre y desamparada del arrimo así paterno como materno, y sin tener otra comodidad para el mantenimiento natural, pide una limosna de los bienes que el caritativo pecho de Vmd. se ha servido repartir a las pobres necesitadas, **socorriéndolas como su Padre**, pues así lo debemos venerar”.*

No obstante, esta aceptación de las consignas de docilidad y pasividad se adecuaba a los que optaban por presentarse como pobres, pero era resistida por lo menos por una parte de los accioneros. Estos, que se consideraban los únicos beneficiarios legítimos del *reparto*, se creían desplazados a causa de las componendas de los regidores y alcaldes del cabildo, que favorecían a los miembros de sus clientelas personales bajo la excusa de repartir limosnas. Doña María de Hurtado, viuda de don Joseph Suárez, se declaraba a la vez accionera, pobre y cargada de ocho hijos, siendo a la vez candidata a la beneficencia y al tercio de los accioneros. No obstante, siempre quedó apartada de los *repartos*, a su entender por no formar parte de aquellas redes personales. En su solicitud no disimulaba los motivos por los que creía haberse visto excluida:

*“...les suplico que por vía de limosna me socorran con la que fueren servido, pues siendo legítima accionera (como es público y notorio) no he merecido se me haya dado hasta ahora el menor socorro **por faltarme padrino para ello**”.*

El capitán Roque Ximénez de Paz, hijo y nieto de accioneros y fundador de la que sería una célebre familia de terratenientes del pago de la Magdalena, tampoco había sido incluido en los *repartos*. Este vecino se creía descartado por pertenecer a un linaje pobre y por lo tanto, con escasa poder de reclamo:

“...dice que en ninguno de los repartimientos que se han hecho para bajeles de registro ni Reales Compañías de esclavos negros de Francia y Inglaterra se le

¹² Sobre el concepto romano de *paternitas*, véase Moses FINLEY *El nacimiento de la política* Grijalbo, Barcelona, 1986, pags. 53 y sigtes.

ha incluido por su pobreza”.

Los mecanismos de patronazgo a que alude la petición anterior no siempre eran aceptados mansamente. No faltó quien expresara su rechazo a esa política de protección clientelar, aun a riesgo de que su solicitud fuera descartada. La reacción de doña María Suárez de Guzmán y Maldonado, que se decía accionera por partida doble, tanto por línea materna como paterna, respondía a esa tónica. Esta vecina se consideraba con suficientes derechos para ser considerada en los *repartos*, “*sin embargo de la contradicción que se ha hecho por algunos capitulares de depravada intención que con motivo y pretexto frívolo y de poca sustancia pretenden excluirla de la parte que debe tener en la repartición*”.

“Troncos y ramas”: los accioneros en el reparto de 1723

Las rogativas de 1723 nos permiten apreciar cómo se percibían a sí mismos los últimos accioneros de Buenos Aires. Estos fueron el 36,6% de los peticionantes: nos encontramos, pues, ante una minoría que pretendía imponerse frente a quienes se decían “pobres”. Minoría que, sin embargo, mostraba una fisonomía bastante compacta: el 96,5% de quienes la componían recibían tratamiento de *don* o *doña*, y en el caso de los hombres, detentaban en unos casos altos grados militares o dignidades sacerdotales y, en algunos otros, antecedentes como funcionarios del cabildo.

Resultaba difícil, tanto para los accioneros como para el mismo cabildo, considerar la acción como un derecho individual. Se advierte claramente una tendencia a la *linajización* de las acciones. No era raro, por lo tanto, que se hablara de la acción “de los Gaetes” o la acción “de los Cobos”.¹³ El cabildo habla en sus acuerdos de “*troncos y ramas*”, refiriéndose a las extensas parentelas que compartían uno o más títulos sobre el ganado cimarrón. Los accioneros buscaban ser reconocidos como parte de las mismas, en algunos casos aludiendo al apellido que los vinculaba, en otros haciendo referencia a un antepasado común, muchas veces ligado a la gesta conquistadora. El clérigo Gerónimo de Avellaneda, por ejemplo, se declaraba “*uno de los principales accioneros herederos de Cristóbal Na[ha]rro*”, uno de los primeros vecinos de la ciudad, mientras que doña Bonifacia de Abalos y Mendoza se decía “*coheredera de Víctor Casco de Mendoza poblador y conquistador de esta ciudad y uno de los legítimos accioneros*”.

Detrás de las acciones se había conformado una tupida red de parentescos, algo que ya podía apreciarse con antelación al *reparto* de 1723. Ya en 1681 se afirmaba que “*hasta los más casamientos han tenido efecto a título de parte de accionero*”.¹⁴ A resultas de esta profusa política matrimonial, algunos de los solicitantes terminaron sosteniendo derechos por parte de padre y de madre, o afirmaban haberlos heredado de más de un antepasado. Tal era el caso de doña María Gutiérrez, “*accionera legítima por ambas líneas paterna y materna, por haberlo sido el capitán Antonio Gutiérrez su padre, como doña Bartolina Maziel por el derecho de su padre el capitán Francisco Maziel, su abuelo*”. O el de doña Petronila Benavídez, “*hija legítima del capitán Diego Benavídez y de María de Sanabria, ambos accioneros*”. Hubo otros que aludieron a derechos heredados de ambos progenitores o vincularon a antepasados más remotos con el origen de la acción.

En varias de las peticiones pueden detectarse los matrimonios entre accioneros, lo que

¹³ Doña Prudencia Sánchez, viuda de Joseph Torres, por ejemplo, decía representar los derechos de su difunto marido, “*accionero que fue por los Gaetes del ganado vacuno que pasta en estas tierras realengas*”.

¹⁴ Citado por Julio V. GONZALEZ *Historia Argentina. La era colonial* Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1957, pags. 143-144.

demuestra que la tendencia endogámica seguía vigente. Catalina Martínez, viuda del teniente Manuel Flores, decía ser “*accionera por dos partes, la primera por su abuelo Juan García Señero y por la otra parte del difunto su marido*”. Juan Bautista de Aguirre Salazar y doña Antonia de Abendaño declaraban serlo los dos, para que les “*apliquen el derecho que les tocan por ambas partes en el repartimiento de los cueros por no habérseles aplicado este tan justo derecho más que una vez y en número tan corto*”. Doña Gregoria de Aguirre y Salazar, viuda de don Gregorio Avellaneda, reclamaba ser tenida en cuenta en el reparto, “*siendo por dos partes accionera legítima a los ganados de estas Campañas pues es notorio [que] dicho mi marido lo era y juntamente yo*”. Y don Nicolás del Pozo y Silva por la acción que heredó de su padre y “*por el derecho que asimismo tiene a dichas Campañas como marido y conjunta persona de doña Beatriz Jimenez Na[ha]rro*”.

El cabildo, que percibió esta tendencia a la *linajización*, se valió de ella para reducir al mínimo el cupo de cueros repartidos entre los accioneros. En más de una ocasión, los peticionantes recibieron una negativa por respuesta, fundada en que ya se le habían dado cueros a sus parientes en repartos anteriores. De las 168 solicitudes presentadas por accioneros, 28 fueron descartadas por ese motivo. La del clérigo Gerónimo de Avellaneda, por ejemplo, fue rechazada porque “*a su padre se le dio una vez y al dicho otra vez*”. A Francisco Gaete se le respondió que “*a su madre se le ha dado dos veces y a su hermana Teresa una vez*”. A doña María de Arroyo Ponce de León, mujer del capitán Luis Pesoa de Figueroa, “*que por haberse dado cueros a su marido en el repartimiento último se le tendría presente otro año*”. Y al alférez Sebastián de Rocha que “*tres veces se le ha dado a su padre*”.

Estas restricciones provocaban inevitables tensiones en el seno de las familias accioneras. En uno de sus acuerdos de 1723, el cabildo dispuso que los repartos debían practicarse de manera tal “*que todos los accioneros, así troncos como ramas, gocen de este beneficio... para que el producto que a cada una tocare se reparta por igualdad entre todos los interesados de la acción repartida*”¹⁵ No obstante, esta injerencia del cuerpo vecinal, que pretendía normar la distribución de cueros en el interior de las parentelas, indica que en el seno de las mismas existían quienes monopolizaban las acciones, excluyendo a sus allegados. Un ejemplo significativo fue el del alférez Joseph Fluxan, que se decía “*hijo legítimo de doña María Romero de los Cobos y sucesor en la acción de ganados cimarrones que dicha mi madre heredó de sus mayores*”. Este acusaba a su tío materno de haber usufructuado de esa acción y dejado a su madre fuera de los repartos. Explicaba el alférez que

“*...mi madre era la mayor heredera en la dicha acción y en toda su vida sólo una vez se le atendió en una muy leve porción de repartimiento, pues aunque haya tenido mayor fortuna en esto mi tío el capitán Pedro Romero en cuyo poder he sabido parar los instrumentos de nuestro derecho, nunca asistió a mi madre, hermana suya, con el interés que era la razón partible*”.

Las consecuencias de la endogamia, empero, no deben exagerarse. El efecto dispersor de las herencias, a pesar de que tendió a ser corregido mediante el matrimonio entre accioneros, provocó que las acciones circularan en un espacio social más amplio y escaparan del control de las antiguas familias *beneméritas*. Algunas peticiones permiten reconstruir esos traspasos. Lo ilustra el caso de doña Josefa Rosa de Alvarado, hija de un funcionario de la Real Hacienda y viuda del general Miguel de Riblos, que hubo de su esposo la acción que éste había heredado de su primer mujer. Josefa Rosa reclamaba

¹⁵ AECBA Serie III, Tomo V, pags. 98-99.

los cueros que hubieran tocado al difunto Riblos “*como heredero a la acción que tenían a los ganados que pastan en estas campañas Doña Gregoria de Cospedal, mujer que fue de dicho Don Miguel, y en ella sus hijos y míos*”.

El cabildo también ejercía su control sobre los accioneros mediante la matriculación de las acciones. Algunos vecinos debieron realizar probanzas para demostrar sus derechos. Tal fue el caso de doña María de Hurtado y Mendoza, que para justificar la acción de sus antepasados “*presentó el testamento de su padre en que le nombra por su universal heredera*”. Pero cuanto más antiguas eran las acciones, más difícil era comprobar sus antecedentes, con lo que menguaban las posibilidades de ser incluido en los repartos. Recordemos el acuerdo del 17 de julio de 1723, en que se deploraban las “*muchas e indisolubles confusiones por la multiplicidad de accioneros incapaces de averiguar sus troncos y ramas*”. Doña María de Saravia, por ejemplo, que se sabía descendiente de accioneros, no tenía manera de probarlo. Era, según decía, “*nieta legítima de Manuel Martínez de Enciso y Saravia por los cuales no duda tener derecho a acción a los ganados de estas campañas pero no siéndole posible, en esta ocasión, exhibir jurídicos instrumentos que manifiesten el mencionado derecho*”. Igualmente vagas fueron las referencias que dio el alférez Antonio Cuenca, quien en su solicitud al cabildo dijo que “*tiene entendido [ser accionero] por parte de su abuelo y abuela don [Enrique] Enríquez y doña Inés de Santa Cruz y Romero accioneros antiguos*”.

Algunos accioneros intentaron reforzar sus derechos aludiendo a los servicios militares de sus antepasados y a la vinculación de estos con la gesta conquistadora. El capitán Juan Maziel del Aguila se consideraba con derechos a ser incluido en el reparto “*por ser persona noble y benemérita con adquiridos servicios propios y de sus mayores*”. Doña Mariana Leal afirmaba ser “*de las primeras [accioneras] de esta ciudad y también de las descendientes de pobladores*”. Isabel Rodríguez era, según decía, “*hija y biznieta de los primeros pobladores y conquistadores de esta ciudad y accioneros de ella*”. Doña Ursula de Abalos y Mendoza era “*nieta y biznieta de los primeros pobladores y conquistadores de esta ciudad y accioneros de ella*”. Y una parienta de esta última, doña Catalina de Abalos y Mendoza, juzgaba que su prosapia y las limitaciones físicas de la vejez eran razones de igual peso, cuando pedía que se la tenga en cuenta “*en atención a ser nieta y biznieta de los primeros pobladores y conquistadores de esta ciudad y accioneros de ella y al presente se halla sumamente pobre y tullida*”.

En el caso de los hombres que se presentaron ante el cabildo, estos solieron añadir una breve relación de los servicios prestados a la Corona. Quizás esto se debió a que en algunas ocasiones, el cabildo había premiado con cueros la participación de los vecinos en las expediciones contra los indígenas.¹⁶ Las viudas, por su parte, hicieron alusión al desempeño militar de sus difuntos esposos. Doña María Benavídez alegaba que su marido “*perdió la vida a manos del enemigo en servicio de Su Majestad*”, y doña María de Lara que el suyo “*toda su vida empleó en servicio de Su Majestad hasta que murió, así en tierra como en mar*”. También refirieron la participación de sus hijos en la defensa de la ciudad. Doña Juana Leal de Ayala, viuda del capitán Antonio de Aguirre, recordaba “*los servicios del dicho su marido y a imitación un hijo suyo en la guarnición de esta Plaza*”. Y doña Luisa Alvarez, hija de un accionero y viuda de un capitán, aludió a “*sus hijos, que siempre acuden (como buenos vecinos) a cuantas funciones se ofrecen para la defensa contra los indios Caribes*” (sic).

Este tipo de alusiones es un indicador de que los derechos de los accioneros se habían ido debilitando, por lo que necesitaban apoyarse en otros argumentos para ser tenidos en

¹⁶ Alegaba un accionero, Lázaro Ruiz de Ocaña: “*jamás se me ha hecho repartimiento y sólo lo he tenido en doscientos cueros que se me dieron como a capitán por las veces que he salido a guardar las Campañas*”.

cuenta. Pero esa estrategia dio lugar a que quienes tenían antecedentes militares pero no poseían acción al ganado pretendieran también ser incluidos. Así lo hizo el capitán Andrés Gómez de la Quintana, que argüía haber “*servido a Su Majestad desde el año pasado de 81 inclusive y de procurador general al Muy Ilustre Cabildo de esta ciudad*”. Un caso curioso es el del capitán Diego Martínez Tirado, que manifestaba haber cumplido con sus deberes de *vecindad* y pretendía ser retribuido. Afirmaba ser “*vecino de esta ciudad quien como tal ha atendido el suplicante y sus hijos al servicio de Su Majestad en ella cada vez que se ha ofrecido... atendiendo VS a que es vecino muchos años ha en esta ciudad y que en ninguno de los antecedentes repartimientos se le ha atendido por ningún motivo*”.

Los accioneros recalcaron el pasado de sus familias, entroncadas en la gesta fundadora y por tal razón *beneméritas*. Los hombres, además, aludieron a sus antecedentes militares y a otros servicios a la Corona, inclusive al desempeño de funciones en el cabildo. Las mujeres, en cambio, prefirieron contraponer las exigencias de su “calidad” a un presente de pobreza, que en muchos casos pudo haber sido más real que discursivo. Doña Leonor de Astudillo dijo haber heredado una acción de sus abuelos, pero por su extrema pobreza se había visto obligada a alquilar la casa de su morada, y ahora rogaba una limosna en atención “*a ser persona noble y benemérita y a hallarse pobre y en edad crecida*”. Lo mismo ocurrió con doña Isabel Chavero de Oquendo, que se confesaba a la vez “*pobre de solemnidad... accionera legítima... y aunque pobre y necesitada, hija y descendiente de los primeros y más principales conquistadores, así de esta provincia como del Reyno de Chile*”. Sin embargo, cuando pidió ser incluida en el *reparto*, no lo hizo como accionera sino “*por vía de limosna*”.

Buena parte de estas mujeres ya percibía que se estaba privilegiando la condición de *pobre* antes que la posesión de una acción. Por eso hubo vecinas como doña Petrona y doña Agustina de Piña, descendientes del vecino fundador Juan Ruiz de Ocaña, que reconocieron ante el alcalde que “*por su abuelo les viene el ser accioneras, aunque dejando este motivo sólo desean atiende Vmd a remediar en algo lo mucho que padecen por su pobreza*”. O como doña Juana Leal de Ayala, perteneciente también las familias fundadoras, que se reconocía “*descendiente de accioneros legítimos a los ganados vacunos de esta jurisdicción*”, pero prefirió aclarar que “*por esta razón no se opone, sino por la de sus necesidades*”.

La limosna destinada a los pobres: viudas, desvalidas y huérfanos en 1723

En las sociedades del Antiguo Régimen, la asistencia a los pobres era considerada un deber cristiano y la caridad era vista como el modo de comportamiento altruista por excelencia. Estas le daban, asimismo, una excelente oportunidad a los ricos para la figuración social, a la vez que permitían a la Iglesia poner en funcionamiento su maquinaria ceremonial. Al hacerse pública, la generosidad se hacía ostentosa y se convertía en una cuestión de honra, ya que los legados constituían un motivo de prestigio tanto para el donante como para su familia.¹⁷ No obstante, las políticas de beneficencia fueron a la larga acaparadas por los organismos municipales, que servían de expresión a los grupos de poder local. Esto sucedía porque la pobreza era también un problema para los sectores dominantes, que buscaban hallar la manera de redistribuir parte del excedente sin alterar las reglas de acumulación y conservación de la riqueza.¹⁸ Eso motivó su interés por socorrer a inválidos, mujeres desamparadas y, en general, todos los pobres que se manifestaran sedentarios, pasivos y respetuosos de la ley, a la vez que se perseguía y castigaba a los individuos considerados físicamente aptos pero socialmente menos dóci-

¹⁷ Abram de SWAM *A cargo del Estado* Pomares-Corredor, Barcelona, 1992, pags. 32-39.

¹⁸ Id., pag. 24.

les, pues alternaban la mendicidad con el trabajo ocasional y el bandidaje. A estos, caratulados tradicionalmente como *mendigos*, *vagabundos* o *viciosos*, se los encontraba más dignos de un correctivo que de la caridad pública.¹⁹

Siguiendo el modelo de Abram de Swam, puede considerarse a la Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XVIII como una comunidad relativamente cerrada, en tanto sus habitantes lograban satisfacer sus necesidades básicas con productos de su entorno rural y la incidencia de las migraciones provenientes de las ciudades vecinas se mantenía en un nivel aceptable. No hubo en este período sacudidas externas que alteraran los modos de dependencia e intercambio de esta ciudad periférica del imperio español. Por ende, faltaron perturbaciones que generaran un aumento en el número de pobres y pudieran afectar el esquema de beneficencia pública, tales como fluctuaciones anormales en el precio de los alimentos básicos, malas cosechas, catástrofes climáticas, rebeliones, guerras o epidemias.²⁰

En relación con los precios, el del trigo no exhibió una tendencia a aumentar, pero el de las reses estaba en alza, afectado por la progresiva extinción de las manadas de ganado cimarrón en las praderas pampeanas. El cabildo expresaba en uno de sus acuerdos que “antes de ahora por la abundancia de ganado que había se comía el cuarto de carne comprado en el matadero lo sumo por un real y medio y hoy por lo escaso del ganado se compra el cuarto de carne por tres reales”.²¹ Puede decirse, sin embargo, que en el período que estudiamos no se presentaron irregularidades en el normal abastecimiento de pan y carne. En cuanto a los trastornos de tipo epidemiológico, hay referencias a que la ciudad estaba experimentando una *peste*, pero fueron realmente pocos los que solicitaron limosnas por esa causa, lo que indica que tuvo un alcance relativo o, por lo menos, no excesivamente perturbador.

Las aspiraciones de los sectores empobrecidos de las sociedades precapitalistas consistían en asegurarse un techo, los alimentos y la ropa necesaria para sus familias, especialmente en los momentos más vulnerables del ciclo vital, cuando las parejas tenían aún niños pequeños que no podían ganarse el sustento por sí mismos o cuando los padres, abandonados ya por sus hijos, entraban en la ancianidad.²² Los historiadores de la pobreza han coincidido en ello: la condición de pobre solía hallarse vinculada a determinadas fases del ciclo vital o familiar, que colocaban a los individuos en una situación de particular vulnerabilidad. De ahí que los niños de menos de 15 años, los ancianos solos y las familias encabezadas por mujeres motivaran una especial atención en quienes articulaban las políticas asistenciales durante el Antiguo Régimen.²³

El 61,7% de quienes presentaron solicitudes en 1723 se declararon pobres. No puede descartarse que ese reconocimiento encubriera una estrategia discursiva: el 46,2% de los peticionantes (esto es, casi la mitad) se dijo pobre a secas, mientras que sólo un 15,5% se declaró *pobre indigente*. Estos últimos eran por definición los que estaban incapacitados para ganarse el sustento, porque no eran aptos para el trabajo o porque incluso trabajando no conseguían satisfacer por medios propios sus necesidades básicas.²⁴ La

¹⁹ Para la temática de la asistencia de los pobres y la corrección de la vagancia por medio del internado en casas de hospicio en la Nueva España, aunque útil para el estudio de toda la América española, véase Silvia M. Arrom “Desintegración familiar y pauperización: los indigentes del Hospicio de Pobres de la ciudad de México, 1795” en Pilar GONZALBO AIZPURU y Cecilia RABELL ROMERO (coord.) *Familia y vida privada en la Historia de Iberoamérica* El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma, México, 1996.

²⁰ Id., pags. 42-43.

²¹ AECBA Serie III, Tomo V, pag. 141.

²² Eric HOBBSBAWM *La era del imperio, 1875-1914* Crítica, Buenos Aires, 1999, pag. 37.

²³ Stuart WOLF *Los pobres en la Europa moderna* pag. 13.

²⁴ Id. pag. 20.

indigencia era, sin lugar a dudas, el último peldaño de la pobreza, o si se quiere, la pobreza más “visible”. No obstante, las solicitudes marcan un aspecto que no deja de ser llamativo: aunque pudiera llegar a ser una mancha en la calidad de una persona, la indigencia no lograba opacarla. Entre las 71 personas que se declararon indigentes, 51 recibían el título de *don* o *doña* y 7 eran accioneras al ganado cimarrón.

Resulta evidente que en una ciudad en que las carestías de alimentos alcanzaban raras veces a las proteínas de origen animal y sólo esporádicamente a los cereales, la idea de pobreza estaba menos vinculada a una dieta deficitaria que a la imposibilidad de sobre llevar cierto *modus vivendi* exigido al individuo en función a su posición en la trama estamental. Aunque en el Buenos Aires del primer cuarto del siglo XVIII la indigencia pudo estar en muchos casos vinculada con una crisis en una fase vulnerable del ciclo vital familiar, debe tenerse en cuenta que sólo una minoría de los peticionantes (el 29,6%) se declaró a la vez indigente y a cargo de una progenie numerosa.

Los huérfanos: entre la estigmatización y la beneficencia

La tenencia de huérfanos sirvió a los peticionantes para enriquecer el panorama de la pobreza, de la que era un componente más. Sin duda se trataba de un elemento persuasivo: la presencia de niños en la casa, propios o ajenos, era difícil de pasar por alto a la hora de determinar a quien se beneficiaba en el *reparto*, sobre todo si conformaban familias numerosas. Por eso, al describir unas condiciones de vida deficientes, los solicitantes solían cargar las tintas sobre ciertos aspectos que podían resultar más convincentes, como tener a cargo hijos de corta edad y muchachas casaderas o haber recogido pequeños sin padres.

Al encarar el tema de la orfandad deben diferenciarse dos situaciones, ambas ilustradas en las solicitudes. Algunos vecinos amparaban a sus nietos, sobrinos o hermanos menores de edad, que de esa manera no traspasaban los límites de la parentela inmediata. Pero otros recogían niños sin filiación reconocida, que según una inveterada costumbre eran abandonados en los umbrales de las casas o el atrio de las iglesias. Algunos de esos pequeños habían sido concebidos en el marco de relaciones socialmente inaceptables, como el adulterio y el amancebamiento, y sus madres habían preferido exponerlos antes de reconocerse públicamente en falta. Pero no podemos descartar que también las moviera la falta de medios con que sustentarlos. En las clases bajas, las uniones ilícitas seguidas de concepciones no deseadas, combinadas o no con la indigencia, movían a las parejas a abandonar a sus hijos, o bien a cederlos a las familias más pudientes.

La sociedad, paradójicamente, colocaba a los niños abandonados por sus padres entre dos opciones: la beneficencia pública y la caridad privada. Desde la Edad Media, la Iglesia había condenado la adopción. Esto tuvo una explicación: si la validez de los lazos de parentesco no se limitaba a la familia elemental, una pareja sin hijos, que normalmente hubiera legado sus bienes a fines piadosos, hubiera contado con herederos forzosos y se hubiera visto impedida de hacerlo.²⁵ La legislación española, por su parte, estigmatizaba la orfandad. Hasta 1794, los huérfanos fueron excluidos de buena parte de los oficios y profesiones, bajo el presupuesto de un origen considerado infamante. Durante el siglo XVII se abrieron en la península hospicios para niños abandonados, generalmente subsidiados por las corporaciones municipales, pero estas fundaciones estuvieron inspiradas en la necesidad de repoblar un país devastado, que necesitaba de agricultores, soldados y marineros. El hecho de que los huérfanos tuvieran prohibido ingresar en la administración pública o estudiar en las universidades señala que se les coartaba cualquier posibilidad de promocionarse, y que sólo se les consideraba aptos para engro-

²⁵ James GOODY *Historia de la familia* Espasa, Madrid, 1990, pag. 136.

sar el debilitado sector de los trabajadores no calificados.²⁶

De las 460 peticiones recibidas por los alcaldes en 1723, 79 fueron presentadas por vecinos que manifestaban tener huérfanos bajo su tutela, o bien por los huérfanos mismos. El 68,4% de estos peticionantes alegó condición de pobre: se situaban así ligeramente por encima del promedio general, que recordemos era del 61,7%. Sin embargo, resulta poco significativa la intersección entre las condiciones de “cargado de familia” (es decir, con hijos propios, generalmente menores de edad) y “a cargo de huérfanos”: tan sólo el 6,11 % de los que tenían una progenie numerosa criaba además niños ajenos a la familia nuclear. Esto es fácilmente explicable: las familias dotadas de escasos recursos que atravesaban por un momento vulnerable del ciclo vital (fundamentalmente el de la crianza de hijos pequeños) no podían distraerlos en alimentar a niños que no pertenecían a su círculo familiar más inmediato.

Ilustremos ahora lo dicho. Una de las solicitantes hizo referencia a las prácticas de abandono, en este caso la exposición de huérfanos. Se trata de doña Gregoria Machado, quien explicaba que “*se halla en pobreza y con la carga de siete huérfanas que he criado y han venido a mis puertas y... las más de ellas no tienen un honesto y proporcionado vestuario*”. Los apellidos de los huérfanos aluden a dos tipologías en la orfandad. A algunos niños se los había criado desde su más tierna infancia, y como no se conocían sus padres por haber sido abandonados adoptaban el apellido de quien los criaba. Pero también estaban los que, aunque reconocidos por sus padres, fueron cedidos por estos a las familias pudientes, o recogidos al quedar huérfanos siendo ya mayorcitos.²⁷

En el caso del capitán Pedro Naranjo, que había criado a varias niñas, parecen haberse producido ambas situaciones. Este albergaba en su casa a “*cuatro huérfanas que son Juana Rodríguez, Ana Romero, Josefa Naranjo, Manuela Naranjo, todas a expensas de mi corta inteligencia, que no se pudieran mantener sino por Altísima Providencia respecto de mis cortas fuerzas*”. Cuando las solicitudes fueron presentadas por las madres de crianza, éstas también recurrieron a argumentos persuasivos como lo era el mantenimiento de una familia numerosa, aunque no fuera sanguínea. Doña Gregoria de Ariza y Valdivia se decía “*con dilatada carga de cinco menores huérfanos de padre y madre que por caridad tengo a mi cuidado*”, mientras que doña Mariana Medrano, “*necesitada y con cuatro huérfanos*”, pedía “*una limosna para poder alimentarlos de los cueros que ahora se reparten*”.

Los niños que circulaban en el interior de las parentelas también fueron mencionados en las peticiones. Las familias extendidas a menudo se conformaban a partir de la desintegración de las nucleares, cuando la desaparición de la pareja provocaba la dispersión de los hijos. Estos accidentes en el transcurso del ciclo vital se producían tanto en las familias empobrecidas como en las acomodadas, pero en éstas últimas los pequeños desvalidos tenían más chances de ser recogidos por sus parientes. Algunas vecinas se limitaron a requerir una contribución del cabildo para sustentar a esos niños, sin aludir a otro tipo de necesidades. Tales los casos de doña Dionisia de Samartín Azocar, que afirmaba estar “*a cargo de dos pobres sobrinas de todos desamparadas*”, y de doña Jacinta de Melo, “*con la carga de tres sobrinas huérfanas*”.

No obstante, algunas mujeres que recogieron niños dentro del círculo familiar los mencionaron en las peticiones para enriquecer un cuadro de situación donde la pobreza se manifestaba de otras formas. Doña Juana Méndez Caravallo, según afirmaba, “*se halla*

²⁶ Buenaventura DELGADO *Historia de la infancia* Ariel, Barcelona, 1998, pags. 135-137.

²⁷ En las familias novohispanas, una historiadora ha hallado evidencias del mismo tipo de tipologías; Cecilia RAVELL ROMERO “Trayectoria de vida familiar, raza y género en Oaxaca colonial” en Pilar GONZALBO AIZPURY y Cecilia RABELL ROMERO *Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica* pag. 116.

cargada de necesidades y a su amparo algunos nietos que por muerte de sus padres los ha recogido". Una accionera, doña Dionisia Gil Negrete, pidió cueros "*para la manutención de sus cuatro hijos pequeños y también una pobre huérfana deuda suya*". Y una muchacha que presentó una solicitud por su propia cuenta, Juana de Salas, se aplicaba a sí misma las calidades de "*huérfana desamparada de padre y madre, pobre de solemnidad*", y explicaba que "*aunque tengo padre era soldado y se huyó y me dejó sola, y así estoy arrimada a una tía tan pobre como yo*".

No todos los huérfanos conseguían ser alojados y mantenidos por abuelos, tíos u otros parientes cercanos. La conformación de *frerèches* (grupos de hermanos encabezados por un adulto, que se hacía cargo de los más jóvenes) era una respuesta a esa falta de cooperación de la familia extensa. Los huérfanos procuraban de esa manera sostenerse sin dispersarse ni abandonar el hogar paterno. El accionero Lorenzo Flores de Santa Cruz declaraba, por ejemplo, tener consigo "*una hermana y otro hermano menor*", aunque reconocía que eran "*los tres muy pobres*". El capitán Luis Giles, por su parte, se decía "*huérfano de padres y con cuatro hermanas doncellas y dos hermanos menores*".

En uno solo de los casos una huérfana aludió a haber recibido el amparo que le ofreció un pariente ritual. El padrino de Clara del Castillo, que de ella se trataba, había pagado a una familia "honrada" para que la alimentara y educara, pero a su muerte no hubo quien se hiciera cargo de esos gastos. Eso motivó el pedido de la muchacha, anotado por un escribiente:

"...dice que habiendo quedado huérfana de padre y madre siendo de tierna edad, su padrino de agua tomó a su cuidado su educación y sustento, y para esto la puso en una casa honrada donde la criaron con mucho recogimiento, honestidad y temor de Dios, y en ella se mantiene hasta hoy conservándose en el mismo tenor de vida".

El alcalde Gallegos la consideró digna de un donativo y le concedió un corte de bretaña e hilo de coser. Clara no fue la única huérfana en pedir limosna por sí misma. Los dos siguientes son ejemplos de cómo dos muchachas presentaron solicitudes por su cuenta, en las que se dijeron a la vez pobres de solemnidad y huérfanas.

"Ysabel María, hija de la Iglesia, pobre huérfana de solemnidad, puesta a los pies de V.S. le suplica por amor del Soberano Cristo de los Afligidos se sirva ampararla y favorecerla con una limosna, pues es tan pobre y desnuda y con tanta necesidad que la obliga a pedirle a V.S. se sirva de ampararla".

"Tomasa de Soria, huérfana de padre y madre y pobre de solemnidad, a Vmd. pide y suplica que del socorro con que socorre a otras pobres le socorra por verse tan desnuda y desvalida de todo socorro humano. Que en ello recibirá merced de la piedad de Vmd.".

El interés corporacional en socorrer a estas muchachas sin familia se fundaba en un imperativo de orden moral: el resguardo de su virtud. En una ciudad que era a la vez puerto y guarnición militar, la presencia de hombres solos –marineros, peones y soldados del Presidio– era considerada una amenaza para su continencia. Un cuarto de siglo antes, en 1697, se había abierto con ese objeto un *beaterio* que alojase a las muchachas huérfanas, pero cinco años más tarde este hospicio, que funcionó en el Hospital Real, tuvo que ser cerrado.²⁸ En 1723 se estaba llevando a cabo una experiencia parecida, la de una Casa

²⁸ Carlos BIROCCO "La primera Casa de Recogimiento de Huérfanas de Buenos Aires: el beaterio de Pedro de Vera y Aragón (1692-1702)" en José Luis Moreno (compilador) *La política social antes de la*

de Recogimiento, de la que no se sabe casi nada.²⁹ Mientras tanto se buscó la inclusión de las huérfanas en el esquema de beneficencia pública, junto con los accioneros y las mujeres desvalidas, para que contaran con un vestuario decente, aspiraran a ser desposadas y de esa manera reprodujeran el estereotipo de *mujeres de probada honestidad*. Al brindarles asistencia, los capitulares echaban una mirada moralista sobre esas jóvenes desprovistas de contención masculina: las hallaban expuestas a las tentaciones de la carne, favorecida por la *fragilidad* de la condición femenina. A las jóvenes, por su parte, les costaba salirse de ese círculo vicioso: carecían de quien las contuviera por haber perdido a sus padres, pero tampoco hallaban quien las pidiera en matrimonio por no tener quien las dotara. Doña Antonia Navas, cuya falta de medios no oscureció su condición de española ni la limpieza de su ascendencia, supo expresarlo a la perfección, cuando se describió a sí misma como “*una de las pobres huérfanas desamparadas de todo humano favor, que ni casas en que vivir tengo, y soy española de legítima descendencia, y sobre todo por enferma no hallo arrimo en el Santo Matrimonio, ni en mis parientes lo puedo hallar por [ser] de igual fortuna*”. También doña Teodora Martínez de Saravia (una muchacha a la que le llevaría casi veinte años hallar un vecino que la pidiera como esposa) decía estar “*padeciendo muchas necesidades de pobreza*” y ser “*huérfana de padre y madre y suelta de matrimonio*”.

Mujeres viudas y desvalidas: los atributos de la pobreza

De las 460 solicitudes presentadas en 1723, 413 corresponden a mujeres. De éstas, 131 eran accioneras y 282 eran viudas y desvalidas sin títulos sobre el ganado cimarrón. A fin de diferenciar uno de otro sector, hemos analizado varios indicadores, el más relevante de los cuales es, lógicamente, la manifestación de pobreza. La proporción de mujeres que se dijeron pobres a secas es prácticamente el mismo en los dos sectores: 49,3% en las desvalidas y 48,9% en las accioneras. Pero la diferencia se hacía más pronunciada cuando las mujeres se aceptaban como *indigentes*: allí nos encontramos ante el 22,3 y el 5,3%, respectivamente. En las que poseían acción al ganado, entroncadas en gran parte con los linajes fundadores de la ciudad de Buenos Aires, se observa un marcado rechazo en admitir penurias extremas, siquiera como un artilugio discursivo.

Ambos sectores coincidieron en utilizar con la misma regularidad un argumento en particular: el de sostener una familia numerosa. El 42% de las accioneras afirmaba tener muchos hijos, no demasiado lejos del 39% de las viudas desvalidas que se reconocían en idéntica situación. En el resto tendieron a diferir: la pobreza parece haber tenido atributos propios, distintivos. Las accioneras prefirieron adjudicar sus necesidades a motivos que juzgaban menos degradantes, como el de no haber sido beneficiadas en los anteriores *repartos de cueros* (32,8%) o, en casos muy contados, tener deudas impagas (2,29%). En cambio, raras veces reconocieron la falta de vestuario decente (5,3%), sobre todo si se compara su actitud con la de viudas y desvalidas, que se mostraron menos remisas a hacerlo (19,1%).

No se trata solamente de estrategias discursivas. El *ser pobre*, como observa atinadamente Stuart Wolf, era una condición relacionada con el status social de cada uno.³⁰ En tanto concepto relativo, la pobreza generaba unas actitudes, unos comportamientos y un discurso que diferían según el sector que afirmaba padecerla. Nos encontramos en las solicitudes con mujeres de alcurnia que se decían pobres porque no disponían de servi-

política social (caridad, beneficencia y política social en Buenos Aires, siglos XVII a XX) Trama, Buenos Aires, 2000.

²⁹ Entre las solicitudes de limosna se encuentra la de dos “*huérfanas de padre y madre que asisten en la Casa de Recogidas inmediata a la de los Ejercicios*”, Lucía Cervantes y Tomasa Bustillos.

³⁰ Stuart WOLF *Los pobres en la Europa moderna* pag. 62.

cio de esclavos o ya no contaban con inmuebles que arrojaran una renta suficiente para vivir de acuerdo con las exigencias de su procedencia social.³¹ Para ellas, la pobreza era haber tenido que renunciar al consumo suntuario, mientras que para otras era faltarles el pan para sus hijos.

No hay que perder de vista que el conjunto de mujeres que solicitaba limosna se hallaba compuesto mayoritariamente por españolas, como lo demuestra su condición abrumadora de *doñas*. Manifestaban una aguda conciencia de status y no habían renunciado a los privilegios que les deparaba su condición sociocromática en el seno de una comunidad de tipo estamental fuertemente signada por los prejuicios étnicos. Ese decidido sentido de pertenencia al estamento dominante hacía a menudo un juego contrastante con su presente de pobreza. Un caso paradigmático fue el de doña María de Rocha, que se definía a sí misma como una “*pobre mujer viuda*”, pero decía hallarse “*exhausta de bienes de que se pueda mantener con la honestidad que requiere su calidad y sustentar la crecida familia que tiene*”.

Otras mujeres remarcaron su honorabilidad a través de epítetos como el de *honrada* o *notable*. Esa terminología se ajustaba a una escala de valores que no se veía alterada por la pobreza y remitía al prestigio original de sus familias, nacido en muchos casos en la gesta conquistadora. Doña Beatriz García, por ejemplo, afirmó que era “*viuda honrada así por mí como por herencia de honrados padres y demás ascendientes*”, y cerró su petición llamando la atención del alcalde sobre la notoriedad de sus declaraciones: “*todo es notorio a V.S. como a todo el pueblo*”. Como se ve, la honorabilidad no sólo se fundaba en criterios de pertenencia, sino que debía ser refrendada por la *pública voz y fama*, es decir, por la opinión corriente de la vecindad. Pero hubo mujeres para las que bastó con resaltar su calidad de *españolas*, que juzgaban suficiente para volver contrastante su pobreza. Doña Antonia Navas declaraba: “*soy española de legítima descendencia... siendo como soy de las descendientes de pobladores*”. Doña Lucía de la Cruz, que era “*público y notorio que es española y pobre vergonzante*”.

Todo lo dicho permite comprender que haya habido vecinos que se declamaran pobres por el solo hecho de haberse quedado sin servidumbre. La *peste* había diezmando a los integrantes de algunos hogares acomodados y se había ensañado especialmente con los esclavos. No obstante, en los tres siguientes ejemplos los peticionantes relacionan la pérdida de sus dependientes con la de su consorte o sus hijos. El derecho a la asistencia era un importante componente de las relaciones maritales o paternofiliales, y la desaparición de los familiares más inmediatos traía especiales complicaciones en los tramos más endebles del ciclo vital. El capitán Antonio Vallejos se declaraba “*abrumado de trabajos con la epidemia que Dios ha mandado, habiéndosele muerto su mujer y tres esclavos que únicamente tenía, y hallarse cargado de años y con tres hijas doncellas*”. Doña Leonor de Herrera suplicaba una limosna “*respecto de habérsele muerto la hija que la socorría y dos esclavos que la mantenían*”. La viuda doña Francisca del Peso, por último, afirmaba “*que se halla cargada de diez hijos todos menores de edad y demás familia y para poderlos mantener se halla tan escasa de medios pues los tres esclavos que tenía y podían servirle de algún alivio se murieron en la presente epidemia con más dos hijos de la suplicante, quedando sin otro amparo que el de Dios*”.

Esa conciencia de status también se manifestaba cuando se veían obligados a renunciar a una existencia ociosa, propia de la élite. Empujados a valerse por sí mismos para satisfacer las necesidades elementales de nutrición y vestimenta, consideraban el trabajo

³¹ A conclusiones parecidas se ha llegado en el análisis de las “declaraciones de pobreza” del período virreinal. Véase el excelente trabajo de Silvia MALLO “Pobreza y formas de subsistencia en el Río de la Plata” en *Estudios e Investigaciones* n°1, La Plata, UNLP, 1989

manual como una degradación y un padecimiento.³² Las mujeres que se veían forzadas a hacerlo se encontraban, además, expuestas a la mirada prejuiciosa de quienes buscaban circunscribirlas al ámbito hogareño. Como se las consideraba proclives a depreciarse en su contacto con el espacio público, alejadas de la protección de sus parientes, ellas mismas expresaron su acatamiento a las consignas de docilidad, remarcando la necesidad de trabajar como una situación aberrante, a la que se veían obligadas para mantener a sus familias.

Esta actitud se aprecia especialmente en muchachas casaderas como doña Rosa, doña Josefa y doña Juana de Acosta, “*solteras y güerfanas*”, que pidieron limosna al cabildo “*por nuestro desamparo y suma pobreza, hallándonos solas sin tener para nuestra manutención más recurso que nuestra corta inteligencia y nuestro trabajo personal*”. Otras dos vecinas solteras, doña Petrona y doña Agustina de Piña, afirmaban hallarse “*necesitadas de medios para pasar la vida por no alcanzar el trabajo de sus manos para ello y ser sus padres ancianos y de ningunas rentas ni fincas para poderlas mantener*”, y solicitaron 200 cueros cada una, que en su opinión era “*lo menos que pueden pedir atenta su gran necesidad y trabajos que por ella padecen*”. Doña Ana y Petrona de Valdivia decían ser “*doncellas pobres y desamparadas que se mantienen con el trabajo de sus manos*” y doña Antonia García Enríquez hallarse “*sin el amparo y sombra de sus padres por ser difuntos como es notorio, ni más congrua que el trabajo de sus manos que es (aunque mucho) insuficiente para mantener sus obligaciones y familia*”.

Lo llamativo en estas peticiones es la exigüidad de las categorías laborales empleadas. Los solicitantes, descendientes casi todos ellos a una élite degradada que no deponía sus antiguos criterios de pertenencia, casi nunca identificaron la naturaleza de sus oficios. Se movían en el interior de un sector donde el trabajo no era considerado un valor y en el que a lo sumo se admitían dos categorías antitéticas: la posibilidad de vivir de rentas, preservándose de toda ocupación manual, y la necesidad de empeñar los brazos en ganarse el pan, aun a costa de denigrarse frente al resto de la vecindad. Quienes admitían trabajar con sus manos se consideraban a sí mismos dignos de conmiseración y trataban de despertar compasión en los representantes del ayuntamiento. “*Se ha de apiadar Vmd. de mi trabajo*”, suplicaba doña Catalina Villoldo, descendiente de uno de los linajes mejor entroncados de la ciudad, al alcalde que le tomó declaración.

Algunas mujeres pedían asistencia al cabildo porque se habían visto obligadas a trabajar y se sentían socialmente rebajadas por ello, pero otras porque por enfermedad, vejez u otras contingencias personales ni siquiera podían hacerlo. Entre estas impedidas se encontraba doña Luisa de Cabrera, una vecina que afirmaba ser “*pobre de solemnidad y viuda con más años de ochenta sin poder echar mano a trabajo alguno y no tener con qué tapar su persona*”. Ejemplos como el de esta anciana nos ponen ante una escala contradictoria, que ponía a los que trabajaban con sus manos tanto por encima como por debajo de los que no lo hacían. Por encima de ellos se encontraban los que no tenían necesidad de hacerlo; por debajo los incapacitados, aquellos que no podían satisfacer por sus propios medios las necesidades más elementales.

Las mujeres que admitían trabajar para mantener a los suyos completaban el cuadro de sus padecimientos con la presencia de niños pequeños o hijas doncellas, que por limitaciones propias de su edad o razones de contención moral no podían abandonar el hogar para contribuir con su sostén. Las peticiones son, en ese sentido, bastante reiterativas, y en general aluden a las fatigas de una jefa de familia que tras haber enviudado, debía cargar con una numerosa progenie. María Avila, “*pobre viuda con seis hijas*”, pedía limosna por “*ser todas inhábiles para poder trabajar*”. Doña Gregoria de Rivadeneyra,

³² Para la visión del trabajo en las sociedades clásicas y medievales, recogida por el mundo hispano, véase Dominique MEDA *Le travail. Une valeur en vie de disparition* Aubier, Paris, 1995.

por su parte, se dijo “*viuda pobre y cargada de hijos a quien mantener a expensas de su trabajo*” y doña Antonia de Vergara y Larroca “*con la carga de tantos hijos e hijas doncellas que dependen de su asistencia y amparo sin más finca que el trabajo e industria*”. A veces, más de una generación de descendientes dependía de una mujer, como en el caso de doña Francisca de Zeballo, quien afirmaba que “*se halla pobre viuda con una hija de estado doncella y tres nietas de menor edad huérfanas de padre y madre y todas se mantienen a expensas del trabajo de la suplicante*”.

Entre las mujeres que reconocían mantener su hogar con el trabajo de sus manos se hallaba doña Antonia Castellanos, hija del capitán Miguel de Castellanos, un oficial de la Corona que fue contador de la Real Hacienda hasta que en 1712 el pesquisidor real Juan Joseph de Mutiloa y Andueza lo acusó de contrabandista, embargó sus bienes y lo envió a prisión. Esta mujer, dotada en su primer matrimonio en casi 5000 pesos, afirmaba haberse visto sometida a los avatares que siguieron a la caída de su padre:

“...cargada de trabajos y enfermedades por que me hallo necesitada de medios para poder pasar la vida, así mía como de mis hijos, por no alcanzar a ello el trabajo de mis manos ni tener rentas, antes bien los bienes de mi padre difunto por las dependencias de las Cajas Reales que hubieron se han embargado, vendido y desposeídom de ellos hasta la casa en que vivía... teniendo a mis pobres hijos desnudos padeciendo mil necesidades”.

Tan sólo cuatro de las peticionantes manifestaron tener un oficio: una de ellas se dijo panadera y las demás costureras. Se trataba en todo los casos de labores *mujeriles*, pero no serviles: esto es, de las pocas tareas rentadas que eran aceptadas en las españolas, ya que su desempeño se circunscribía al ámbito hogareño. Estas ocupaciones no debieron ser raras: durante la primera década del siglo XVIII, varias vecinas de Buenos Aires amasaban bizcocho para aprovisionar a las embarcaciones varadas en el puerto. Pero salir del hogar para ganarse el sustento era considerado propio de las mujeres de condición servil. Estas vecinas justificaron su necesidad de trabajar recurriendo a los tópicos acostumbrados, como los de mantener niños propios o recogidos, faltarles parientes que las socorrieran o carecer de vestimenta *decente* para cumplir con los deberes rituales de la catolicidad. A esto último hizo precisamente alusión doña María Ramírez de Sáñez, que encabezaba una *freréche* de seis mujeres solteras:

*“...en voz y nombre de cinco hermanas... dice que son unas pobres huérfanas, solteras, desamparadas de todo género de alivio **por no tener otra inteligencia que las costuras** que no le alcanzan para el mantenimiento corporal, de suerte que siendo la desnudez de todas tan suma, se ven precisadas para cumplir con la obligación de cristianas de pedir un manto prestado para poder salir a oír misa”.*

Doña Ana Burgueño era viuda y “*con la carga de cinco hijos inocentes sin que para su manutención tenga otra inteligencia ni socorro que la que se ofrece de tarde en tarde de **algunas cortas costuras***”. Otra porteña, María Magdalena, se declaraba “*pobre viuda de solemnidad*” y decía estar “*cargada con una huérfana, Paula Flores, de padre y madre... manteniéndola por haberla criado sin más medios que el de **su ejercicio de panadera**, que nunca puede conseguir forma suficiente con que honestarle su desnudez*”. También doña Margarita de Llanos y Brizuela había recogido una niña, y decía hallarse “*sin medios humanos con qué mantenerse ni mantenerla si no es **con el ejercicio de su aguja**, en que la tiene industriada y buena educación*”. Este último ejemplo nos ayuda a

comprender el papel de los huérfanos dentro de los hogares españoles: la niña que doña Margarita tenía a su cargo había sido *industriada* en el oficio de costurera, es decir, colaboraba con la manutención de su hogar y a la vez estaba siendo preparada para poder subsistir de su trabajo, ya que no se esperaba que un matrimonio oportuno pudiera mejorar su suerte.

Fueron escasas las peticionantes que manifestaron no poseer una vivienda en propiedad; a lo sumo reconocieron que la que habitaban no era lo suficientemente apropiada para un *notable*. El no tener morada propia podía echar dudas sobre su condición de *vecinos* y dejarlos fuera de las políticas asistenciales del cabildo: recuérdese que para serlo no sólo debía demostrarse haber servido a la Corona con caballos y armas, sino también tener residencia en la ciudad. A comienzos del siglo XVIII imperaba todavía esa concepción arcaizante que se remitía a los días de la fundación, cuando Juan de Garay había repartido solares entre sus compañeros de expedición, destinados a convertirse en las familias *beneméritas* del nuevo poblado. Sólo en casos excepcionales, la falta de inmuebles urbanos y rurales, sumada a tópicos más comunes como el del trabajo manual y la *desnudez*, concurría en convertir a una vecina como la siguiente en una pobre vergonzante, digna de una limosna:

“Catalina de Aguirre, viuda de Francisco Morales, puesta a los pies de V.S., representa la suma necesidad en que se halla, y con cuatro hijos que sustentar, tres hijas y un varoncito todos cuatro tan criaturas que no le pueden ayudar en lo más mínimo, sin casa, chacra ni estancia, y tan necesitada que no alcanza su corto trabajo a ponerse una camisa, motivo que le impide de ir a la iglesia hay más de seis meses, hallándose sin ningún esclavo ni esclava ni persona alguna de servicio, por todo lo cual recurre a la caridad y piedad de V.S. para que se sirvan socorrerla con alguna limosna”.

No más de cuatro mujeres, entre ellas la anterior, reconocieron carecer de una propiedad en el radio urbano.³³ El resto, aunque pudiera admitir que la casa de su morada se hallaba en pésimas condiciones o hipotecada, dio a entender que ésta le pertenecía, o por lo menos se guardó de afirmar lo contrario. Una accionera, doña Leonor de Astudillo, declaró que *“para poderse mantener por estar en pobreza alquiló su casa, saliendo a vivir fuera de ella con notable incomodidad, y que los estipendios de ella aun no alcanzan a su compostura y reparos”*. Doña Mariana Lucía de Póbeda sostenía que se hallaba *“pobre y desamparada sin tener más bienes que la casa de su morada con la pensión de pagar censo y tener dos hijas solteras y un hijo que sustentar”*.

La falta de habitabilidad de la vivienda fue desde siempre uno de los atributos más reconocibles de la pobreza. Algunos de los peticionantes de 1723 aludieron a ella con cierto dejo de patetismo. Doña Mariana de Zárate, por ejemplo, se decía *“encerrada entre cuatro paredes de una pobre casa que por no tener con qué repararla está para arruinarse, con el grave perjuicio que le puede sobrevenir de soterrarla a deshoras, no teniendo forma de evitar el riesgo, ni en qué vivir que no sea con esta pensión”*. Bernarda Méndez convivía con seis hermanas, huérfanas como ella, con bastante precariedad, *“viniéndose abajo una choza de albergue de nuestro reparo...sin tener con qué repararla por falta de efectos”*. Hubo quien aludió a condiciones concretas de deterioro en paredes o techos, como doña Juana del Hoyo y Robles, que afirmaba que su casa estaba *“en estado de arruinarse, como ha sucedido estos días venirse [abajo] parte del enmaderado de la sala de su vivienda, que es forzoso deshacerla toda”*. O como la beata doña Ana Conget aseguraba vivir *“con suma pobreza, con el techo de su casa en*

³³ Doña Francisca de Betancor, afirmó que *“ni aun el rancho en que vivo es mío”* y Jacinta de Loza que *“vive en casa alquilada”*. Mariana Leal se decía enferma, sola y *“sin casas”*.

ña Ana Conget aseguraba vivir “*con suma pobreza, con el techo de su casa en el suelo, lloviéndose, sin tener fuerzas para poderlo levantar*”.

Pero sin duda, el atributo más reconocible de la pobreza era la falta de vestimenta decente. Era –y sigue siendo– uno de los criterios exteriores que permitía reconocer el status de una persona. Tanto en las mujeres como en los hombres, el atuendo subrayaba el rango social y la pertenencia étnica, permitiendo una rápida pero infalible identificación de la procedencia estamental de cada individuo. En las vecinas españolas contribuía, además, a realzar la honorabilidad de su condición. En muchas de las peticiones éstas afirman estar *desnudas*, término hiperbólico que nos remite al uso de una indumentaria desacorde con su status socioétnico. Que las limosnas se abonaban en especie, más precisamente en textiles, era un hecho conocido por las solicitantes y las empujó a solicitar un corte de paño a los alcaldes, a fin de remediar esa falta de vestimentas *decentes*. La vecina que elevó la siguiente petición consiguió que el cabildo le concediera 15 pesos en distintos cortes de tela:

*“Antonia de Torres viuda que fue de un soldado de este presidio con dos hijos pequeños y el uno enfermo, y tan pobre que apenas con su trabajo se puede sustentar, y hallarse en forma tan desnuda que no puede de día parecer delante de la gente, y ahora tiene noticia que dan algunas limosnas de los cueros que se hacen para los navíos de registro y así tan destituida de todo remedio me valgo del patrocinio de VS suplicándole por amor de Dios **me den alguna cosa para poder tapar mi desnudez**, merced que espero recibir de la piadosa mano de VS”.*

También Juana de Roxas fue favorecida por el ayuntamiento con 15 pesos en textiles. En este caso, se aludió a la imposibilidad de cumplir con los deberes rituales a causa de carecer del atuendo apropiado:

*“Juana de Roxas vecina de esta ciudad, viuda pobre desvalida y tan pobre que para ir a oír una misa pide un manto y pollera prestado, parece ante VS y dice que por Dios se apiaden de ella con una limosna para siquiera **un manto y una pollera para ir a ver a Dios**, que en ello recibirá Vmd de la grandeza de VS de quien espera le hagan una limosna”.*

Otras mujeres de la vecindad admitieron no cumplir con sus deberes rituales por no disponer del atuendo adecuado a su condición. Gabriela Martínez suplicaba al alcalde que la asistiera, “*pues es tanta mi necesidad que ni aún para unos zapatos tengo siquiera para ir a ver a Dios*”. Doña Francisca de Betancor se declaraba “*pobre desvalida y cargada con cinco hijas doncellas sin tener ninguna manto ni pollera con que ir a misa, ni yo tampoco*”. Doña Beatriz Pereyra y sus hermanas pedían una limosna “*por hallarse en suma pobreza, que aún no tienen mantos para poder oír misa con la decencia que a la calidad de sus personas conviene*”. Doña Josefa Prado, madre de cuatro hijos, afirmaba que vivían “*en tal estado que el fatigoso trabajo mío no les alcanza más que para otra cosa que para el natural sustento, hallándose estos desnudos y yo sin forma de cumplir con el precepto de la misa por falta de vestuario preciso a su necesidad*”.

El 13,5% de los peticionantes reconoció que su vestimenta habitual no se hallaba en completa concordancia con su condición socioétnica. Pero este porcentual se distribuía desigualmente: mientras que una de cada cinco desvalidas admitió esa carencia, entre las accioneras sólo lo hizo una de cada veinte. Entre estas últimas se encontraba doña María Cabral de Ayala, que se reconocía como “*perteneciente a los accioneros*”, pero solicitaba una limosna para poder concurrir a misa:

“...ocurre por éste a hacerle manifestación de su güerfandad y total pobreza para que... se le aplique aquella que baste siquiera para hacer un vestido con que ir a la iglesia a cumplir con las obligaciones precisas de cristiana”.

El alférez Sebastián de Rocha era “vecino feudatario y accionero de esta ciudad” pero, según decía, mantenía a los suyos labrando la tierra con sus propias manos. Tanto él como su familia padecían “*mucha desnudez*” y sólo podían concurrir a misa a la iglesia de la Santa Recolección, frecuentada por indios, mulatos e indigentes. El cabildo, empero, lo consideró integrante de la matrícula de los accioneros y descartó su solicitud porque su padre había sido incluido en el *tercio* en tres oportunidades anteriores. He aquí su petición:

*“...dice que se halla padeciendo grande necesidad causada en la poca salud que ha tres años que padece con la carga de mujer y seis hijos todos menores sin tener más amparo que el de Dios para mantenerlos, y la más sensible es que en todo este tiempo **no ha podido parecer en lo Público ni ir a misa sino a la Recolección [a] causa [de] la mucha desnudez que padece con su mujer e hijas, que mi corta salud los ha mantenido con el arado en la mano**, y porque a la presente le faltan las fuerzas... suplica a la piedad de VS lo atienda con algunos cueros de los que se han de repartir para la carga de los Navíos de Registro y Real Asiento, que en ello hará VS una obra muy acepta a los ojos de Dios en atención a ser hijo de accionero”.*

Debido a la ausencia de atuendo apropiado, el alférez evitaba asistir al mismo templo que frecuentaban los demás vecinos españoles y se había visto obligado a renunciar a un espacio social que, paradójicamente, le estaba deparado por su prototipo socioétnico. La indumentaria favorecía la alternancia entre pares y, en definitiva, posibilitaba que cada estrato socioétnico ocupara los lugares que le estaban asignados durante la concurrencia a los espacios cívicos y rituales.

Entre los que manifestaban no disponer de vestimenta adecuada ocuparon un lugar destacado las que la reclamaban para sus hijas núbiles. La falta de ajuar para dotarlas podía convertirse en un impedimento para casarlas convenientemente. Algunas madres deplo- raron su carencia de medios materiales, como doña Francisca de Melo, que se hallaba “*con una hija sin estado y ella impedida y con mucha pobreza*”, o doña María Benítez, “*con dos hijas en edad de tomar estado, con la misma pobreza que yo*”. Pero cuando las hijas estaban ya próximas a desposarse, la alusión a la falta de vestimenta adecuada se hacía más directa: así sucedió con doña Isabel Chavero de Oquendo, “*pobre de solem- nidad, impedida, con una hija doncella próxima a su estado de matrimonio sin ninguna providencia aun para el más corto vestuario*”, y con doña Leonor de Roxas y Encinas, que se preparaba “*para dar estado a una de sus hijas y no tiene forma de darle el preci- so vestuario*”.

Resulta bastante llamativo, por último, que no haya una referencia más generalizada a factores tradicionalmente ligados las crisis de subsistencia, como el hambre y las epi- demias. Salvo para consignar la muerte de esclavos, que habían dejado a algunos veci- nos opulentos sin servicio personal y por lo tanto en estado de “pobreza”, contadas peti- cionantes aludieron a la peste que había estallado en Buenos Aires. Una de las pocas fue la de doña Francisca de Astudillo, que rogó al cabildo que le concediera una limosna “*por haber tenido la familia enferma de esta epidemia y no haber dejado alhaja ni ves- tido que no haya vendido con dichas enfermedades y hallándome al presente destitui-*

da de un todo, sin tener más consuelo que el de Dios". En otra doña Josefa Domínguez pedía por sus *"cinco hijas doncellas, convalecientes de la epidemia que se está experimentando y una de ellas impedida y para poder en parte remediarles algún vestuario de la desnudez en que se hallan"*.

Hubo otras alusiones a padecimientos físicos, pero estos no parecen haberse producido en el marco de ese suceso epidémico concreto. Se trata sobre todo de mujeres que habían quedado postradas a causa de alguna enfermedad, como doña Lucía Santiago, *"pobre de solemnidad enferma en una cama cosa de nueve meses"*, o doña María Morán, *"pobre de solemnidad e impedida en una cama a más tiempo de catorce años de graves achaques que adolece"*. Otra vecina, doña Juana de Vargas y Agüero, dijo haber estado *"tres años en una cama cargada de mil necesidades y con nueve hijos y el uno demente"*.

En cuanto al hambre, una sola petición hace referencia concreta a la falta de ración. Doña Mariana de Zárate confesaba que había días en que le faltaba hasta un trozo de carne de res que comer. Sin duda, aludía al alimento más difundido y barato que se consumía en aquella ciudad. No obstante, puede pensarse que no se trató más que de un artilugio discursivo: más tarde presentó una segunda solicitud, en que descartaba el argumento del hambre y centraba su pedido en el costoso mantenimiento de un huerfanito, al que según decía estaba criando por darle el gusto a su marido. Decía la primera de aquellas peticiones:

*"Doña Mariana de Zárate, hija del alférez Lorenzo de Zárate, quien sirvió en este presidio más de cuarenta [años] y aún casi cincuenta, quien aunque me dio estado en vida, mi poca suerte permitió se ausentase al reyno de Chile y ha más de quince años que en su ausencia he procurado mantenerme a costa de mi sudor y trabajo personal, en cuyo dilatado tiempo he estado muchas veces sacramentada, y con las pagas de médicos para mis enfermedades, he quedado en tan suma miseria e indecencia que no sólo no puedo oír misa, sino **que muchas veces se me pasa el día sin tener un pedazo de carne de vaca que comer**. Recurro a la piedad de V.S. para que por amor de Dios y Su Santísima Madre, de las limosnas que Nuestro Rey y Señor hace a los pobres, en lo que hubiere lugar, V.S. atienda a mi miseria que de Su Divina Majestad tendrá el premio"*.

Mujeres viudas y desvalidas: la ausencia de contención masculina

La endeblez de la posición femenina no se limitaba a los trastornos ocasionados por la pobreza. Cuando no había un varón al frente de la familia, la mirada moralista del entorno se centraba en la conducta de la esposa y de las hijas, ya que faltaba un hombre que ejerciera la supervisión de sus comportamientos sexuales dentro y fuera del ámbito doméstico. La limpieza de proceder de las mujeres, sobre todo de las que estaban solas, era evaluada por la opinión de la comunidad y, de acuerdo con la expresión del historiador francés Jacques Rossiaud, se volvía *tributaria de la fama pública*.³⁴ Situación paradójica, ya que no pocas las vecinas quedaban a la cabeza de sus hogares en forma ocasional o permanente. Mientras que las mujeres de casta que carecían de contención masculina solían agregarse a otros grupos familiares en calidad de sirvientas o dependientes, las españolas se convertían en jefas de familia desde muy jóvenes.³⁵ Un repaso a los

³⁴ Jacques ROSSIAUD "Prostitución, juventud y sociedad en las ciudades del Sudeste del siglo XV" en Arturo FIRPO (comp.) *Amor, familia, sexualidad* Argot, Barcelona, 1984, pag. 189.

³⁵ Cecilia RAVELL ROMERO "Trayectoria de vida familiar, raza y género en Oaxaca colonial", pag. 116.

padrones de habitantes del siglo XVIII bastaría para convencernos de ello.³⁶

La solución que cada grupo socioétnico daba al exceso de mujeres variaba. En el caso de las españolas, se agregaba el hecho de que la Iglesia porteña no colaboró hasta bastante tardíamente en la absorción de este excedente. Hasta la década de 1740 Buenos Aires no contó con conventos de monjas y las muchachas que deseaban profesar debían trasladarse a Córdoba, o más lejos aún. Una de las órdenes religiosas masculinas, la Compañía de Jesús, procuró ofrecerles una solución alternativa: alentarlas a llevar una vida de devoción “puertas adentro”, en el interior de sus casas. Fueron las llamadas *beatas*. Sin embargo, parecen haber sido pocas las que optaron por llevar una vida de oración, ya que la falta de respaldo del Estado o de la Iglesia no les aseguraba una subsistencia dedicada a las prácticas piadosas. Por ello la sociedad porteña contó con una abundancia relativa de mujeres que no habían podido optar ni por el matrimonio ni por tomar los hábitos.

En las peticiones de 1723 esto último resulta evidente. No pocas aluden a *frerèches* compuestas por muchachas solteras, una de las cuales se acercaba al despacho del alcalde para pedir un corte de tela o unos reales en plata. Entre las que lo hicieron estuvo doña Luisa de Aguirre: ella y sus hermanas doña María y doña Francisca afirmaban ser “*pobres mujeres sin alivio de varón que nos asista en nuestras necesidades*”. Pero también concurrieron al cabildo las mujeres que se habían quedado solas y reclamaban una limosna para sus hijos. No todas eran viudas. A veces la ausencia del marido era eventual, pero servía como fundamento para pedir una limosna, sea porque estaba sirviendo a la Corona o porque había dejado a su esposa y a sus hijos sin suficientes recursos para subsistir. Era el caso de Petrona de Abrego, que se declaraba *pobre de solemnidad* y había quedado a cargo de hijos y sobrinos:

“...dice que está con su marido ausente en la correguría de las Salinas y a su cargo tiene su madre enferma en una cama por los muchos años que le asisten y seis hijos, con cuatro huérfanos de padre y madre que quedaron de una hermana suya después de sus días”.

La separación entre los cónyuges podía convertirse en permanente, muchas veces a causa del abandono. Doña Lucía de Monaga, con su marido ausente y su padre enfermo, afirmaba que era “*ella sola la que mantiene a sus padres, hermanos y un hijo que tiene, sin tener para ello más medios que su trabajo personal*”. Bernarda de Avendaño declaraba “*hallarse sin marido por habérsele ido, dejándola preñada de una niña que hoy vive y tiene con suma necesidad de las dos*”. Pero también hubo mujeres que, formando parte de un grupo familiar encabezado por un hombre, debían afrontar por sí mismas la manutención de sus familias. Doña Gerónima Micaela de Barrionuevo y Mendoza se encontraba, por ejemplo, “*con tres hermanas huérfanas de madre y con el padre sumamente pobre por haberse empleado muchos años en el servicio de Su Majestad y experimentado en él grandes atrasos por la falta de Situados*”.

Cuando no había un esposo o un padre que cumpliera con los deberes de protegerlas, alimentarlas y contenerlas, las mujeres acudían a sus parientes. La parentela, que aportaba a los individuos un sentimiento de identificación frente a los otros, se constituía, sin lugar a dudas, en un puente hacia las redes de vecindad, proporcionando un medio de

³⁶ El más cercano a la época que estudiamos, el padrón de Buenos Aires de 1744, revela un alto porcentaje de hogares encabezados por mujeres, en la mayor parte de los casos viudas, pero también abandonadas o con maridos ausentes; José Luis MORENO y Marisa DIAZ *Unidades domésticas, familias y trabajo en Buenos Aires a mediados del siglo XVIII* Mimeo, presentado en las XVI Jornadas de Historia Económica celebradas en la Universidad Nacional de Quilmes en septiembre de 1998.

acceso a la comunidad.³⁷ El desamparo y la marginación provocados por la ausencia de lazos familiares forman parte de la retórica de varias solicitudes, tanto de las accioneras como por las que no lo eran. Doña Sebastiana Vélez Patrón afirmaba vivir en la ciudad “*sin tener pariente alguno en ella*”. Las hermanas Catalina, Juana y Antonia Ramírez de Sáñez, accioneras por ser herencia de su abuelo, el capitán Bernabé González Filiano, se decían “*unas pobres huérfanas de padre y madre... destituidas de parientes*”. Doña Antonia de Altafulla, que era igualmente accionera, suplicaba una limosna “*por hallarse pobre doncella y sola, y imposibilitada de remedio alguno para trabajar*”.

Donde mejor se aprecia esta doble ausencia de contención masculina y familiar es en las huérfanas. Una de ellas, María de las Nieves, dijo que “*es soltera y no tiene quien por ella sea*”; otra, María Tomasa, que vivía “*sin tener ningún amparo por ser soltera*”. Se presentaron a sí mismas sin dar apellidos, quizá porque eran *hijas de la Iglesia*, sin padres ni parientes desde el momento mismo del bautismo. El cabildo, sin embargo, estaba dispuesto a desviar una parte de las ganancias del comercio de cueros para socorrer a estas muchachas sin medios, asumiéndose como una alternativa frente a la ausencia de una parentela que las asistiera.

Entre los peticionantes, en cambio, faltaron los forasteros y los vagabundos: los primeros porque no eran reconocidos por el ayuntamiento como miembros de la vecindad; los segundos porque habiendo transgredido sus márgenes, se habían colocado fuera de ella. Tan sólo una mujer proveniente de Cuyo se atrevió, sin éxito, a suplicar por una limosna:

“...Doña Rosa de Ordinola... la más desvalida y arrojada forastera, natural de la ciudad de Mendoza, dice hallarse totalmente desvalida, andando de casa en casa a expensas de diferentes naturales que la favorezcan, experimentando diferentes vejaciones”.

Las redes de parentesco proporcionaban, como se ve, un sentimiento de estabilidad y de pertenencia, y aunque podían mantenerse latentes, se activaban en ocasión de una crisis o una necesidad. Para las mujeres, socialmente inhabilitadas para mantenerse por sí mismas, el padre o el esposo conformaban el primer círculo de contención, mientras que esas redes actuaban como un segundo círculo, que podía brindar amparo en un trance de crisis o peligro. Cuando carecían de ambas fuentes de apoyo, se veían empujadas a recurrir a la caridad privada o a la beneficencia pública. En la retórica de las solicitudes, esta situación de desamparo es curiosamente identificada con la orfandad. El siguiente testimonio es el de una vecina descendiente de la élite conquistadora, que a pesar de ser viuda y emparentada con las familias más antiguas de la ciudad, afirmaba ser “*una de las pobres huérfanas*”:

*“Doña Mariana Leal, madre del capitán Pedro Ferreira, vecina de esta ciudad, digo que soy una de las pobres huérfanas, tullida en una cama y ciega de llagas que le han pasado a los ojos de las narices, y sin tener un trapo que ponerme, ni qué llevarme a la boca si no fuera [por] unas pobres que lo dejan de comer por mí, sin casas y por fin desamparada de todo humano favor, y soy viuda de edad de setenta años por [lo] menos y soy esposa legítima como consta a toda esta ciudad, de legítima descendencia, y sobre todo que por enferma y tantos años **no soy para esperar el matrimonio ni en mis parientes** y lo puedo hallar por cortos, y siendo como soy de las primeras [accione]ras de esta ciudad y también de las descendientes de pobladores. A VS pido y suplico se sirvan de numerarme en*

³⁷ Martine SEGALÉN *Antropología histórica de la familia* Taurus, Madrid, 1992, pags. 90 y sigtes.

el Número de las pobres viudas huérfanas tullidas y ciegas y desamparadas honradas de esta ciudad y asignarme alguna cantidad de las reparticiones comunes en las reparticiones de pobres en que obrarán Vuestras Señorías con piedad y justicia que de limosna pido por Dios”.

No faltan en las peticiones las alusiones a la caridad privada, que era seguramente la única alternativa para muchos desvalidos. Algunas de las familias más antiguas habían descendido a una existencia miserable, al punto de haber tenido que salir a mendigar por las calles. Doña Lorenza de Ocampo, que se definía a la vez como “*accionera a los ganados retirados en las campañas*” y “*pobre desvalida*”, fue señalada por el alcalde como hija “*del pobre ciego que anda por la calle Juan de Ocampo*”. Doña María de la Cruz lamentaba que sus hijos hubieran tenido que salir a pedir, “*echándolos por las calles a la vergüenza en agencia de un pedazo de pan*”.

No obstante, la caridad privada no siempre adoptaba la carátula de la mendicidad. Algunas mujeres habían preferido ponerse bajo el amparo de las familias pudientes, aceptando su patronato, con tal de no salir a recorrer las calles. Tales fueron los casos de doña María de Melo, quien dijo hallarse “*en suma necesidad y pobreza por haberle faltado las señoras beatas Enríquez, que la asistían con lo necesario con su mucha caridad*”, y de Josefa Sánchez, “*huérfana de padres y a las expensas de una pobre señora*”. Pero este tipo de relaciones se daban asimismo dentro de las parentelas, y seguramente adoptaba el mismo régimen de contraprestaciones que el clientelazgo. Doña Ignacia Rodríguez de Figueroa pidió una limosna en nombre de su sobrina doña Ana de Samartín, “*quien se mantiene a mis expensas por no tener otro recurso*”; luego la misma Ana presentó una solicitud, por ser accionera y “*pobre viuda desamparada y cargada de empeños que ha contraído para poder mantenerse*”.

Conclusiones: la priorización de un prototipo de pobreza

La modalidad que adoptó el *reparto* entre viudas y desvalidas merece un último párrafo. El acuerdo del 17 de julio de 1723 había dejado establecido que se separarían 300 pesos de lo que reportara la venta de cueros “*para repartir entre pobres miserables*”. No obstante, las sumas distribuidas por el ayuntamiento triplicaron lo previsto, es posible que a expensas del *tercio* de los accioneros.

El perfil de las beneficiadas por el ayuntamiento no queda del todo claro. Obviamente, se nos escapan los vínculos de clientelazgo entre cabildantes y peticionantes, de modo que es poco lo que podemos agregar sobre la existencia de mecanismos encubiertos de contraprestación, que sin duda existían e incluso fueron denunciados en un par de oportunidades. Sin embargo, ciertas tendencias permiten definir los lineamientos de la política seguida por la corporación vecinal. En primer lugar, dos de cada diez mujeres seleccionadas eran accioneras, que aceptaron renunciar a su participación en el *tercio* a cambio de una *limosna*. El antiguo sistema de *reparto de cueros* estaba siendo corroído por un nuevo esquema asistencial, de modo que parte de los antiguos accioneros estaba siendo absorbido por éste. De esta manera, se iba reduciendo la siempre problemática matrícula de los accioneros y se ampliaba el sector de los pobres, que dependía exclusivamente de la generosidad del cabildo y se presentaba más dócil a sus consignas y menos exigente en sus requerimientos.

Por otra parte, el porcentaje de beneficiadas que expresó carecer de vestuario decente doblaba la media general de las peticionantes. Estas mujeres, necesitadas de un corte de ruan o de bayeta con que *honestarse*, encarnaban el prototipo de pobre que se deseaba priorizar: el que no venía en busca de dinero, sino de bienes de uso. No cabe duda que hubo arreglos encubiertos entre los alcaldes y los registreros, ya que los textiles pasaban

de las bodegas de los navíos a manos de las interesadas; al parecer, el alcalde a cargo del *reparto* expedía órdenes de libranza para que fueran a buscarlos a bordo. De esa manera, los registreros abarataban los costos de la corambre, ya que la abonaban con mercancías a precio de embarque y no en plata amonedada. En el siguiente cuadro se expresa la predominancia de textiles en que se efectuaron las *limosnas*.

Cuadro n°1 – *Limosnas* en especie y en plata

| LIMOSNA EFECTUADA EN: | \$ | % |
|---|------|-----|
| Plata en pesos | 105 | 12 |
| Bretaña | 134 | 15 |
| Mercería: hilo, cintas, encajes, polvillo | 49,2 | 5,4 |
| Bayeta | 120 | 13 |
| Ruan | 224 | 25 |
| Crea | 14,9 | 1,6 |
| Sempiterna | 93,1 | 10 |
| Otros cortes de tela | 140 | 15 |
| Otros artículos | 29,7 | 3,3 |
| TOTAL | 910 | 100 |

Dicho en forma sintética: la plata amonedada no pasó del 12% de lo repartido entre huérfanas, viudas y desvalidas, mientras que los textiles ascendieron al 79,6%. Por lo menos la mitad de estos era proveniente de Francia (el ruan y la bretaña), lo que confirma el tradicional rol intermediador de los registreros gaditanos entre una España desahuciada y una Europa ávida de acceder a los metales preciosos de Hispanoamérica a través de la producción de manufacturas. El resto consistió en artículos de mercería, tales como hilo, cintas, encaje y polvillo (5,4%), y otros efectos varios (3,3%), en algunos casos americanos, como el tabaco.

En la política asistencial del cabildo creemos detectar, en conclusión, tres claros objetivos. Primeramente, el de limitar los derechos de los antiguos accioneros, trasvasando a algunos de ellos al nuevo esquema de beneficencia en carácter de *pobres* y excluyendo a otros mediante la revisión de la matrícula o la excusa de haberlos beneficiado en *repartos* anteriores. En segundo lugar, el de socorrer con *limosnas* a las familias que criaban huérfanos, evitándose el gasto de costear un hospicio que se hiciera cargo de los niños abandonados. Por último, el de conseguir que los sectores más necesitados de la vecindad se mostraran sumisos a la corporación y agradecidos con la *limosna* recibida. Las peticiones presentadas en 1723, destinadas a convencer a los alcaldes, son un acabado testimonio de esa imagen del pobre obediente a las autoridades, y le suman otra imagen igualmente nítida, la de la mujer que no traspasa más que ocasionalmente los límites del ámbito doméstico, que sólo se expone al público para cumplir con sus deberes rituales y que obedece las consignas de sometimiento femenino, aunque por eventualidad se convirtiera en jefe de familia.

Resumen: “Alcaldes, capitanes de navío y huérfanas. El comercio de cueros y la beneficencia pública en Buenos Aires a comienzos del siglo XVIII”

Desde comienzos del siglo XVII, el cabildo de Buenos Aires reguló la explotación del ganado cimarrón y representó a la vecindad en la venta de cueros a los navíos de registro y de arribada. No obstante, entre las décadas de 1690 y 1710, los gobernadores despojaron a la corporación vecinal de esas atribuciones y asumieron el tráfico de cueros con los registreros y con el asiento negrero de la Compañía de Guinea. Para desplazar al ayuntamiento, argumentaron que las utilidades del tráfico iban en beneficio de obras públicas (como la reparación de la catedral y el fuerte) y de un esquema de beneficencia dirigido a paliar las necesidades básicas de las familias pobres y las muchachas huérfanas.

Dos Real Cédulas de 1714 y 1716 restituyeron la comercialización de los cueros a la corporación municipal: la élite porteña volvió así a apoderarse, valiéndose de su plataforma institucional, de la explotación de las riquezas pecuarias. Pero el esquema de beneficencia creado por los gobernadores subsistió. En este trabajo se analiza como se repartieron en 1723 las utilidades de las últimas vaquerías bonaerenses entre los vecinos accioneros, los pobres y las huérfanas. No cabe duda de que si el cabildo asumía esta responsabilidad era porque la pobreza representaba un problema para los sectores dominantes, que buscaban hallar la manera de redistribuir parte del excedente sin alterar las reglas de acumulación y conservación de la riqueza. Eso motivó su interés por socorrer a inválidos, mujeres desamparadas y, en general, todos los pobres que se manifestaran sedentarios, pasivos y respetuosos de la ley, a la vez que se perseguía y castigaba a los individuos considerados físicamente aptos pero socialmente menos dóciles, pues alteraban la mendicidad con el trabajo ocasional y el bandidaje.

Demostraremos en nuestra ponencia que la política asistencial del cabildo de 1723 se sustentaba en tres objetivos. Primeramente, el de limitar los derechos de los antiguos vecinos accioneros, trasvasando a algunos de ellos al nuevo esquema de beneficencia en carácter de pobres y excluyendo a otros mediante la revisión de la matrícula o la excusa de haberlos beneficiado en repartos anteriores. En segundo lugar, el de socorrer con limosnas a las familias que criaban huérfanos, evitándose el gasto de costear un hospicio que se hiciera cargo de los niños abandonados. Por último, el de conseguir que los sectores más necesitados de la vecindad se mostraran sumisos a la corporación y agradecidos con la limosna recibida.